

## EL INTERÉS LEGÍTIMO EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL

Miguel Pérez López\*

*A mi hijo Miguel Pérez Baca,  
en el inicio de sus estudios preparatorianos.*

**SUMARIO:** I. Introducción, II. La Situación Jurídica de los Particulares frente a la Administración Pública, III. El Derecho de los Administrados a la Legalidad y la Protección de los Intereses Jurídicos y Legítimos de los Particulares frente a la Administración Pública, IV. La Incorporación del Interés Legítimo en el Juicio Contencioso Administrativo Federal, V. Conclusiones, Fuentes de información.

**RESUMEN:** Recientemente se llevó a cabo una reforma legal para reconocer al interés legítimo como presupuesto procesal del juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, aunque circunscrito a la materia ambiental, que forma parte de un movimiento de enmiendas a favor de la protección jurídica de dichos intereses.

**PALABRAS CLAVE:** Interés legítimo, juicio contencioso administrativo, Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, materia ambiental.

**ABSTRACT:** Recently to issue reform legal form reconognize to the interest legitimate as background of trial against Federal Administration before the Federal Court of Tax and Administrative Justice, even if limited to matter environmental, inside of a process of amendment in favour of the legal protection from those interest legitimate.

**KEYWORDS:** interest legitimate, trial against Federal Administration, Federal Court of Tax and Administrative Justice, matter environmental.

---

\* Profesor Titular "C" Tiempo Completo, por oposición, del Departamento de Derecho de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, desde 1985. Miembro fundador del Comité Académico del Instituto de la Judicatura Federal (1995-2000), servidor público en dependencias de la administración pública federal y asesor parlamentario en la Asamblea de Representantes del Distrito Federal y en la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión (LVII Legislatura). Actualmente miembro de la Junta Directiva del Instituto Federal de Defensoría Pública, órgano del Consejo de la Judicatura Federal. Autor de 47 artículos de investigación y de dos libros: *Estudios constitucionales sobre la Comisión Nacional de los Derechos Humanos* y *El régimen constitucional del Distrito Federal* (en prensa). Agradezco el apoyo del Lic. José Granados Roldán para la realización de este artículo.

## **I. Introducción**

El objeto de este estudio procura exponer cómo, en nuestro ordenamiento jurídico, el interés legítimo es una categoría surgida del ámbito de la justicia administrativa, de forma especial del contencioso administrativo y del procedimiento administrativo, que ahora se incorpora al bagaje conceptual del proceso de amparo, en virtud de la reforma constitucional publicada el 6 de junio de 2011, que lo reconoce como base de legitimación para solicitar la protección de la justicia federal, o sea el interés legítimo se convierte en un presupuesto procesal del amparo, en especial el indirecto con exclusión de cuestiones procesales, y que también resulta incorporado como un presupuesto procesal jurídicamente delimitado en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo (LFPCA).

Para ello se expondrán, así sea de forma superficial, las concepciones sobre el interés legítimo, tanto doctrinales como jurisprudenciales, y el reconocimiento legal del interés legítimo como presupuesto procesal del juicio contencioso administrativo sustanciado ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativo (TFJFA).

## **II. La situación jurídica de los particulares frente a la Administración Pública**

### **1. El estado social de derecho y su crisis**

El Estado de Derecho apareció como uno de los mecanismos de la estructura constitucional destinado a fijar límites objetivos y permanentes a la actuación del poder público. La idea originaria del Estado de Derecho tiene su apoyo filosófico en el liberalismo y, por lo tanto, la libertad se convierte en la divisa del esquema constitucional decimonónico.

Con el paso del tiempo y del desarrollo social, el dilema entre el liberalismo individualista y la propuesta socialista, en sentido amplio, se rompe con la aparición de un modelo político-jurídico caracterizado por una visión humanista, basada en un criterio de justicia conmutativa, y realista con un enfoque social. Dicho modelo reconoce las diferencias socioeconómicas de la comunidad política, admite la necesidad de una intervención creciente del Estado que se convierte en rectoría del desarrollo económico, asume un activismo estatal a favor de las clases sociales colocadas en una situación desventajosa y construye el entramado empresarial estatal a partir de la propiedad pública. Así, la Constitución de Querétaro de 1917 irrumpe como pionera en la fundación de lo que después sería denominado genéricamente como “Estado social de Derecho”, al plantear ese modelo jurídico-político renovador, que avanza sin caer en extremismos y que cobra espectaculares éxitos en su aplicación. Las Constituciones de Bonn de 1949 y de la monarquía española de 1978 asumen expresamente lo que era implícito en la Ley Suprema mexicana del 17: la consagración del Estado social de Derecho.

El surgimiento del Estado social de Derecho provocó un paulatino crecimiento del poder ejecutivo y de la administración pública a su cargo, y al mismo tiempo de la legislación

administrativa, de las facultades discrecionales y de la actividad empresarial estatal, mismo que fue creciendo al término de la Segunda Guerra Mundial. El activismo estatal fue encomendado a los poderes ejecutivos, convertidos en garantes de los derechos sociales y rectores del desarrollo económico.

Con la instauración del Estado de Derecho liberal aparece una diversidad de formas de control de su función administrativa y aumentadas en el tránsito hacia la versión intervencionista estatal. Con apoyo en la doctrina del constitucionalista alemán Karl Loewenstein, podemos decir que la administración pública fue sometida a controles internos y externos (intraórganos e interórganos en la terminología del distinguido jurista germano). Los controles pueden ser calificados materialmente como políticos, jurisdiccionales, económico-financieros o sociales. El control de la actividad administrativa fue origen del derecho administrativo en la tradición romano-canónica-germánica, sobre todo en lo que hace al control jurisdiccional, cuyo paradigma ha sido el Consejo de Estado francés.

Los postulados del Estado constitucional liberal se mantuvieron con la reorganización del poder político en el nuevo Estado social y democrático de Derecho, en particular a) el sometimiento de los actos de autoridad a la legalidad y b) el control jurisdiccional sobre dichos actos, dentro de una perspectiva individualista. El crecimiento administrativo -y en particular su financiamiento- fueron enfrentados por el control jurisdiccional bajo esa perspectiva. Tardaron en darse modificaciones en el control jurisdiccional para atenuar el estricto derecho, la protección de los intereses eminentemente jurídicos, la individualización de las acciones, la enumeración taxativa de las causales de ilegalidad o la excesiva formalidad en el tratamiento de las cuestiones administrativas. Sin embargo, el control jurídico sobre la administración pública fue desigual en su etapa del Estado interventor. En el caso mexicano, la instauración del Tribunal Fiscal de la Federación (1936) y la del Tribunal Contencioso-Administrativo del Distrito Federal (1971) se dan en momentos históricos calificados como cumbres del intervencionismo estatal, brazo ejecutor del sistema presidencial. Sin embargo, el control presentaba las limitaciones inherentes ya descritas, que hacían prácticamente nugatorio el acceso a los tribunales encargados de la justicia administrativa a la mayoría de la población afectada con las resoluciones administrativas.

Punto aparte venía a ser la resolución de los recursos administrativos por parte de la propia administración pública, a veces convertidos en otro obstáculo para los particulares (ya diferenciados como administrados), cuando la decisión de dichos medios de defensa resultaba guiada por criterios políticos y no jurídicos.

La idea del Estado social de Derecho, a pesar de su carga humanista, enfrentó serios cuestionamientos sobre su conformación y efectividad, en especial a partir del inicio de la década de los años ochenta del siglo XX. Se vinculó, de manera mecánica e inapelable, el volumen de la administración pública con los resultados de su gestión, la ineficacia administrativa con la corrupción, el paternalismo con el derroche financiero. Aparecieron aplicaciones prácticas de la

doctrina que se empezó a llamar “neoliberalismo”, basadas en un persistente economicismo: saneamiento de las finanzas públicas, restricción del gasto público, disminución de trámites administrativos, garantías para la inversión, y el llamado “adelgazamiento” del Estado, que propiamente fue un “adelgazamiento” de la administración pública, además de un constante alejamiento de las posturas defensoras de los derechos sociales y una confianza ciega en la política de privatización de bienes y servicios públicos. La divisa ideológica de lo que se empezó a llamar modernización, fue la retirada del Estado de los espacios donde fue rector y ejecutor incuestionable. Apareció el endiosamiento del “mercado”.

Paradójicamente, la disminución del aparato estatal y la llamada política de “desregulación” no provocaron un efecto similar en la legislación administrativa, sino, al contrario, desde la década de los ochenta del siglo pasado se ha mantenido un ritmo ascendente en la expedición de leyes y reglamentos, así como la aparición de nuevos órganos administrativos encargados de controlar la actividad de los particulares (denominados informalmente como “órganos reguladores”, ahora ya reconocidos en la Constitución Federal en la reciente reforma en materia de telecomunicaciones, y ubicados mayoritaria y formalmente en los órganos desconcentrados de la administración pública federal centralizada),<sup>1</sup> además de que en los ordenamientos legales surgió la tendencia de delegar facultades para expedir disposiciones de carácter general en los titulares de los órganos administrativos (acuerdos de carácter general, normas técnicas, bases, criterios interpretativos, por mencionar algunos ejemplos de este caos normativo).

Si bien disminuyó el aparato administrativo, la presencia de la administración pública, tanto jurídica como orgánica, aumentó ante los nuevos problemas sociales, los avances científicos y tecnológicos, y el dinamismo de la economía de mercado.

La constitución del nuevo Estado instaurado desde los años ochenta del siglo XX mantiene el clásico esquema de atribuciones expresas, disminuye el activismo social de la administración pública y resucita las facultades de policía, dándole un cariz de rectoría no interventora o “reguladora”. La administración pública se torna en una administración de control de las actividades particulares.

En la nueva configuración estatal, de todos modos la administración pública ejerce su poder sobre los particulares, no solo en su modalidad de autoridad fiscal, manifestación originaria del poder administrativo, sino también en campos iniciados en el esplendor del Estado interventor, como la protección ambiental; la ordenación de las concentraciones urbanas; la disposición de los recursos naturales y en especial los hidráulicos; la protección del consumidor; la contratación administrativa; el otorgamiento de permisos, autorizaciones, licencias y concesiones; o el régimen de la propiedad industrial e intelectual.

---

<sup>1</sup> PÉREZ LÓPEZ, Miguel, “Estudio sobre las Salas Especializadas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa” en *Praxis de la Justicia Fiscal y Administrativa*, número 11, pp. 15-18 (vid. <http://www.tfjfa.gob.mx/investigaciones/pdf/estudiosobrelasalasespecializadastfjfa.pdf>).

A este conjunto de materias administrativas deberán agregarse los nuevos espacios donde aparece la administración pública: la transparencia y el acceso a la información pública gubernamental, la protección de datos personales, la competencia económica, el arbitraje médico, las variedades vegetales, la biotecnología, la energía, las telecomunicaciones, el desarrollo social, por mencionar los espacios descollantes.

El ejercicio del poder administrativo obliga a mantener y mejorar el control sobre la administración pública, en todas sus modalidades: político, social, económico-financiero y jurisdiccional. Aquí nos ocuparemos del control jurídico de la administración pública encuadrado en la genérica denominación “justicia administrativa”.

## 2. LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA

Sobre la concepción de la Justicia Administrativa he seguido los planteamientos desarrollados por Antonio Carrillo Flores y Héctor Fix-Zamudio,<sup>2</sup> y ubicándola como uno de los medios de control sobre la administración pública, mismos que resultan de variadas formas, con los cuales se trata de imponer límites racionales, objetivos y permanentes a la actividad de los agentes del Poder Ejecutivo. En la doctrina encontramos diversidad de criterios de clasificación de los mecanismos de control sobre la administración pública.<sup>3</sup>

A efecto de tener un marco conceptual que sirva para el desarrollo del presente estudio propondré un concepto de justicia administrativa y presentaré sus divisiones. La justicia administrativa es el conjunto de medios jurídicos que están a disposición de los particulares, personas físicas o jurídicas, para tutelar su esfera de derechos e intereses, que puede resultar afectada por los actos u omisiones de las autoridades de la administración pública. Esos particulares adquieren la categoría específica de administrados, derivada del género gobernado.

<sup>2</sup> Cf. CARRILLO FLORES, Antonio, *La Justicia Federal y la Administración Pública*, segunda edición, Porrúa, México, 1973 (la primera edición llevó por título *La defensa jurídica de los particulares frente a la administración en México*, Porrúa, México, 1939), y FIX-ZAMUDIO, Héctor, *Introducción a la Justicia Administrativa en el ordenamiento mexicano*, El Colegio Nacional, México, 1983. Esta ideas sobre la justicia administrativa las he compartido y desenvuelto en varios estudios: PÉREZ LÓPEZ, Miguel, “La enseñanza de la Justicia Administrativa en México” en *Alegatos*, número 21, mayo-agosto de 1992, México, Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco, pp. 49-58; *id.*, “Necesidad de leyes uniformes del procedimiento administrativo” en *Alegatos*, número 28, septiembre-diciembre de 1994, México, Universidad Autónoma Metropolitana, pp. 359-372; *id.*, “La Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Expectativas y secuelas”, en VV. AA., *Los grandes problemas jurídicos. Recomendaciones y propuestas. Estudios jurídicos en memoria de José Francisco Ruiz Massieu*, Porrúa, México, 1995, pp. 291-295; *id.*, “La justicia administrativa en la Constitución federal mexicana” en *Alegatos*, número 41, enero-abril de 1999, México, Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco, pp. 97-108; e *id.*, “El recurso de revisión en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo” en *Revista de Investigaciones Jurídicas*, número 24, 2000, México, Escuela Libre de Derecho, pp. 396-399.

<sup>3</sup> Cf. HUERTA-PORTILLO, Mario de la, “El control de la administración” en Cortiñas-Peláez, León (dirección), *Introducción al Derecho Administrativo*, I, segunda edición, Porrúa, México, 1994, pp. 291 a 319, y VÁZQUEZ ALFARO, José Luis, *El control de la administración pública en México*, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, México, 1996.

La justicia administrativa se compone de los medios auxiliares de la jurisdicción administrativa y de la jurisdicción administrativa en estricto sentido. Durante mucho tiempo se ha considerado que el término justicia administrativa solo debería ser atribuida al control de la legalidad ejercido por los tribunales encargados de resolver los conflictos entre la administración pública y los administrados. Sin embargo, Carrillo Flores de forma implícita y expresamente Fix-Zamudio han considerado que se le debe extender a todos los medios de defensa del administrado frente a la actuación administrativa.<sup>4</sup> En especial, la obra del Dr. Fix-Zamudio ha puesto énfasis en que la justicia administrativa también abarca al *ombudsman*, a la responsabilidad patrimonial del Estado, a las leyes de procedimiento administrativo y a las leyes para el control de la informática, englobándolos en un apartado denominado “medios auxiliares de la jurisdicción administrativa”, cuyo objeto consiste en disminuir la carga de trabajo de los tribunales administrativos, a efecto de que puedan resolver de manera expedita los conflictos planteados por los administrados contra los actos administrativos.<sup>5</sup>

Con el paso del tiempo se ha comprobado que esos medios auxiliares también sirven para resolver cuestiones administrativas que difícilmente serían planteadas en la jurisdicción administrativa, por tratarse de la afectación a intereses legítimos, difusos o simples, debido a que en los tribunales es dominante la protección de los intereses jurídicos de los particulares. En especial, el *ombudsman* procura dar esa mayor cobertura a los intereses legítimos, difusos o simples, que no sería posible plantear mediante una demanda ante un tribunal.

### **3. Los controles de la administración pública y la defensa de los administrados**

Descontados los olvidos y las imprecisiones inherentes a la obra constituyente, la diaria labor de ejercer el poder público localiza y explota esos resquicios o a veces provoca verdaderas oraciones al edificio constitucional, transformándolas en inmunidades del poder<sup>6</sup> o impunidad de los gobernantes (carencia de sanciones o imposibilidad de alcanzar una efectiva y pronta justicia). Los mecanismos de defensa de la Constitución siempre tratan de equilibrar la inviolabilidad y la supremacía constitucionales con los fenómenos de poder encuadrados jurídicamente.

<sup>4</sup> CARRILLO FLORES, Antonio, op. cit supra nota 2, pp. 9 a 28, y FIX-ZAMUDIO, Héctor, op. cit supra nota 2, pp. 11, 12 y 21.

<sup>5</sup> FIX-ZAMUDIO, Héctor, loc. cit. Además el profesor Fix-Zamudio ha mantenido el mismo criterio, enriquecido con las debidas actualizaciones, en FIX-ZAMUDIO, Héctor, “La justicia administrativa en México”, en VV. AA., *Conferencias Magistrales*, México, Consejo de la Judicatura Federal-Instituto Federal de Defensoría Pública, e *id.*, “Concepto y contenido de la justicia administrativa” en Cisneros Farías, Germán, FERNÁNDEZ RUIZ, Jorge y LÓPEZ OLVERA, Miguel Alejandro, *Justicia Administrativa, Segundo Congreso Iberoamericano de Derecho Administrativo*, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, México, 2007, pp. 171-234.

<sup>6</sup> El término “inmunidades del poder” es tomado de la obra de GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo, *La lucha contra las inmunidades del poder*, Civitas, Madrid, 1987, que abarca a los actos estatales que no pueden ser impugnados por los particulares, o, en sus palabras, quedan “inmunes al control y a la fiscalización de los jueces” (p. 22).

La defensa constitucional, hasta hace poco, respondía a la ideología liberal decimonónica de los orígenes del constitucionalismo, consecuentemente los derechos individuales son objeto de esa defensa, así como las invasiones competenciales de los poderes públicos, pero dirigido esto último a la protección de esos derechos, aunque se ha ido tomando conciencia sobre la necesidad de otros instrumentos procesales para proteger la supremacía constitucional, como vienen a ser las acciones de inconstitucionalidad y el fortalecimiento de las controversias constitucionales en el derecho mexicano. La ampliación del *telos* constitucional (libertad más democracia y justicia social); la integración del régimen representativo proporcional, aparejada con el reconocimiento en la ley fundamental de los partidos políticos; la intervención del Estado en la economía, la seguridad social y la cultura; los derechos sociales; el crecimiento de la administración pública y la complejidad del derecho administrativo, son nuevos fenómenos constitucionales que obligan a la superación, adaptación o creación de las modalidades de la defensa constitucional. Además de un crecimiento de los medios de protección de los derechos fundamentales de tipo internacional, como viene a ser el control convencional interamericano de protección de los derechos humanos, consolidado a partir de la trascendental reforma constitucional de junio de 2011 y de los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el caso de “Rosendo Radilla”<sup>7</sup>

Precisamente el crecimiento de la administración pública y su situación en el esquema del Estado de Derecho fincan la necesidad de ofrecer a los particulares los medios que hagan posible el ajuste de la actividad administrativa a la Constitución y a la legalidad, además de garantizar a la sociedad de que el comportamiento de los servidores públicos de la administración se hará conforme a derecho y a los criterios administrativos que hagan eficiente la prestación de los servicios públicos.

Esto justifica la creación de diversos mecanismos de control jurídico de los órganos de la administración pública, además de otros controles de tipo político y social que rebasan el ámbito del derecho. A partir de la teoría de la separación de funciones estatales, el jurista José Luis Vázquez Alfaro expone los tipos de control que se pueden ejercer sobre la actividad a cargo de la administración pública. El control de la administración pública puede ser a) por el *poder legislativo*, b) *interno* de la administración pública y c) por los *órganos jurisdiccionales*.

El *control del poder legislativo*, esencialmente de carácter político, depende de la forma de gobierno dominante (régimen parlamentario o presidencial y sus variaciones constitucionales), se desenvuelve en el procedimiento legislativo, por medio de las comisiones legislativas o del control presupuestario.

---

<sup>7</sup> Cf. GARCÍA RAMÍREZ, Sergio y MORALES SÁNCHEZ, Julieta, *La reforma constitucional sobre derechos humanos (2009-2011)*, segunda edición, Porrúa-UNAM, México, 2012, pp. 90-111; FERRER MAC-GREGOR, Eduardo, “Interpretación conforme y control difuso de convencionalidad: el nuevo paradigma para el juez mexicano” en *id.* y SAIZ ARNAIZ, Alejandro (coordinadores), *Control de convencionalidad, interpretación conforme y diálogo jurisprudencial*, Porrúa-UNAM, México, 2012, pp. 91-183, y FIX-ZAMUDIO, Héctor y VALENCIA CARMONA, Salvador, *Las reformas en derechos humanos, procesos colectivos y amparo como nuevo paradigma constitucional*, Porrúa-UNAM, México, 2013, pp. 1-22

El *control interno* se realiza mediante las leyes de procedimiento administrativo, los recursos administrativos y los órganos internos de control de la administración pública.

El *control jurisdiccional* lo llevan a cabo el poder judicial y los tribunales administrativos, de acuerdo a la tendencia de jurisdicción administrativa adoptada (tendencia judicialista o francesa), sin dejar de considerar el novedoso control judicial difuso de convencionalidad de protección de los derechos humanos.

Además de estos controles basados en la concepción clásica de la división de poderes, deben tomarse en cuenta otras formas de control de la actividad desarrollada por la administración pública como son el *ombudsman* y los *tribunales de cuentas* o *contralorías autónomas*.<sup>8</sup>

Se ingresa al tema de la Justicia Administrativa cuando el control jurídico sobre la administración pública incide en sus relaciones con los gobernados, esencialmente cuando se trata de sus actos de autoridad, aunque en los últimos tiempos se ha abarcado a los actos de la administración derivados de sus relaciones de coordinación con los particulares o de prestación de servicios públicos.

#### **4. El principio de legalidad y la administración pública**

El constitucionalismo significó, en sus orígenes, una corriente jurídica destinada a exorcizar las actitudes despóticas del gobernante y someterlas al imperio de la ley, entendida esta como una forma con un fin. La actuación de la autoridad debe quedar apegada a la forma -lo cual es acatamiento del principio de legalidad- y dirigida a cumplir con un imperativo de justicia inherente a la ordenación social.

La Constitución es caracterizada como un ideal ordenación del trabajo político, encauzada a limitar la práctica del poder público y a la protección de los derechos fundamentales de los miembros de la sociedad. Queda entendida como una ley conformadora y limitadora, pues determina la organización política y fija los derechos subjetivos reconocidos por el orden jurídico (por lo menos esa fue la concepción más favorecida en los orígenes del constitucionalismo), y limita, de esa manera objetiva, en términos formales, la actuación de la autoridad investida del poder público, tratando de exterminar cualquier manifestación autoritaria de ese poder.

La limitación jurídica -esto es, objetiva, independiente de la voluntad del gobernante- se procura alcanzar con la edificación institucional, basada en declaraciones de derechos catalogados como fundamentales, separación de funciones (clasificación y reparto de las formas de la función pública) y apego de la actividad gubernamental a la norma jurídica.<sup>9</sup>

<sup>8</sup> Cf. VÁZQUEZ ALFARO, José Luis, op. cit. supra nota 3.

<sup>9</sup> Cf. GARCÍA PELAYO, Manuel, *Derecho Constitucional Comparado*, Alianza Editorial, Madrid, 1993, pp. 141-162; DEL PALACIO DÍAZ, Alejandro, *Del Estado de Derecho al derecho del Estado*, Leega, México, 1988, pp. 17- 23, y QUIROZ ACOSTA, Enrique, *Lecciones de Derecho Constitucional*, tomo I, Porrúa, México, 1999, pp. 30-34.

Las consideraciones valorativas son inherentes al estudio de la Constitución, pues se utilizan conceptos de invocación liviana y precisión aparentemente inalcanzable, impregnados de una fuerte carga ideológica e invariablemente evocados en las asambleas constituyentes. Las abstracciones dominantes en esas asambleas (guiadas por un prurito de concisión y mecanismo, apresuradas por el tiempo de su convocatoria y constreñidas por los factores reales y organizados de poder de su circunstancia histórica), procuraron alcanzar un sistema jurídico político armonizado, donde no quedase resquicio para el abuso en el ejercicio del poder estatal.

En este ambiente político y doctrinario, el principio de legalidad fue la principal limitante del ejercicio del poder, en especial el encomendado a la administración pública. Eduardo García de Enterría ha comentado que la consagración del principio de legalidad en el Estado constitucional liberal y su aplicación significó la aparición del Derecho Administrativo como instrumento destinado a la protección de la libertad, en especial como se originó a partir de la Revolución Francesa y de la fundación del Consejo de Estado.<sup>10</sup> Así entonces, la tarea de los tribunales administrativos consiste en tratar de restaurar la legalidad infringida por la actividad de la administración pública.

A la administración pública se le encomendó como fin estatal primario la satisfacción de las necesidades colectivas, sujeta a encuadrar sus actos a una *legalidad estricta*: limitación por competencias, actuación manifestada con la forma debida, respeto a la ordenación secuencial del procedimiento administrativo y aplicación mecánica de la ley cuando se actualizan fácticamente los supuestos previstos en la propia ley. Una falla en dicho encuadramiento justificó la demanda de restaurar el orden vulnerado, siempre que se afectasen los intereses jurídicos de los particulares con los actos de la administración pública.

La transformación del Estado constitucional en sus tres facetas históricas: liberal, social y neoliberal (esta última denominación es de uso corriente en estos tiempos, por no emplear otra mejor), significó cambios en los fines estatales perseguidos, sin que esto alterase la idea de sujeción a la ley, aunque los medios de control sí tuvieron una peculiar evolución, sea en los ya existentes, creación de nuevos y adopción de figuras foráneas.

Igualmente, la concepción de los derechos de los particulares frente al poder administrativo también evolucionó en las tres facetas del Estado constitucional, exigiendo el replanteamiento de la posición de los administrados, aunque se ha dado un enriquecimiento institucional y normativo a favor de estos, como es el surgimiento de los procedimientos de masas; el tránsito de los criterios clásicos de legitimación procesal (*del interés jurídico hacia el interés legítimo*); la implantación de la suplencia de la instancia deficiente sea en sede administrativa o jurisdiccional, el establecimiento de nuevas medidas cautelares para hacer efectiva la justicia administrativa y el reconocimiento de los derechos fundamentales más su recepción internacional. Esta evolución ha provocado que se estudie el papel del particular frente a la administración pública.

---

<sup>10</sup> Cf. GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo, *Revolución francesa y administración pública*, Alianza Editorial, Madrid.

## 5. EL CONCEPTO DE ADMINISTRADO

La relación entre la administración pública y los particulares generó la aparición del concepto de “administrado”, como una especie del género “gobernado”. El administrado fue visto por la legislación y la doctrina en una situación pasiva, como contribuyente, usuario de los servicios públicos o concesionario, y conforme evolucionó el Estado social de Derecho también se perfiló hacia posiciones actuantes y reclamantes.

En lo que respecta al medio mexicano, el concepto de administrado ha tenido más divulgación doctrinaria que raigambre legal, aunque la jurisprudencia si lo emplea de manera regular. En la doctrina española, Eduardo García de Enterría y Tomás-Ramón Fernández consideran que el administrado supera la calidad de simple receptor de deberes impuestos desde la administración para asumirse como un titular de derechos subjetivos públicos, de intereses legítimos y hasta de intereses simples. Al respecto, expresan la peculiar posición del administrado en el mundo del derecho:

“Como todos los demás sujetos, el administrado, al desplegar su propia personalidad dentro de los límites de la capacidad jurídica y de obrar que le reconoce el ordenamiento jurídico, puede resultar titular de una serie de situaciones jurídicas, que convencionalmente suelen agruparse en dos grandes categorías, según comporten una ampliación de su esfera jurídica, o bien una limitación o minoración de la misma. Se habla así de situaciones jurídicas de ventaja o activas y de situaciones jurídicas de desventaja, de gravamen, o pasivas. Entre las primeras es habitual incluir tres tipos o clases diferentes -las potestades, los derechos subjetivos y los intereses legítimos, estos últimos en contraposición a los intereses simples-, enunciados por orden descendente de acuerdo con la mayor o menor intensidad de la ventaja que suponen para su titular; entre las segundas, se incluyen la sujeción, el deber y la obligación.”<sup>11</sup>

Como claramente expresan los autores españoles citados, el administrado no es en el sistema jurídico actual un mero objeto del Derecho Administrativo, ni tampoco un término de referencia de simples posiciones pasivas (deberes, sujeciones, obligaciones), puesto que es titular de situaciones jurídicas activas frente a la Administración, y categóricamente afirman que “sin esta realidad, el Derecho Administrativo no existiría, pura y simplemente”<sup>12</sup> Además señalan como situaciones jurídicas activas a la *potestad*,<sup>13</sup> los *derechos subjetivos* y los *intereses legítimos*. Como situaciones jurídicas pasivas detectadas por los autores españoles tendríamos a las *sujeciones*, los *deberes* y las *obligaciones*.

<sup>11</sup> GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo y FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón, *Curso de Derecho Administrativo*, tomo II, Civitas, 1991, pp. 28-29

<sup>12</sup> *Ibid.*, p. 31

<sup>13</sup> Definida como “[...] poder genérico, no referido a un sujeto en particular, ni a un objeto determinado, un poder, en fin, que sólo a través de su concreto ejercicio puede llegar a actualizarse y traducirse en un poder concreto, es decir, en un verdadero derecho subjetivo”, *loc. cit.*

Por lo que toca a la sujeción, esta:

“(…) supone sólo la eventualidad de soportar los efectos de una potestad de otro sobre el propio ámbito jurídico, pero que una vez la potestad ejercida surgen en ya otras figuras jurídicas subjetivas, derechos, deberes, obligaciones, distintas de la reglamentaria, pero una vez que el Reglamento se ha dictado, su incidencia concreta sobre mi esfera jurídica se expresa en una u otra de estas distintas figuras; así, también, mi sujeción a la potestad tributaria (de cuyo ejercicio resultará para mí, eventualmente, una obligación tributaria), o a la potestad expropiatoria, etc. La sujeción se resuelve, pues, una vez la incidencia del ejercicio de la potestad producida en mi esfera jurídica (que es lo que la sujeción asegura), en toda la serie de las demás figuras subjetivas. Es, en este sentido, una situación puente a las demás.”<sup>14</sup>

Los *deberes* derivan del reconocimiento mismo de las potestades públicas, y los *derechos*, en cambio, “*necesitan constantemente de esa afirmación estando como están en trance permanente de ser desconocidos o conculcados*”.

Por último, García de Enterría y Fernández consideran que “*la distinción entre deber y obligación discurre, en efecto, por un camino paralelo a la de potestad y derecho subjetivo*.”

## **6. Los derechos subjetivos públicos**

Los derechos subjetivos conforman uno de los temas de más profundidad en la Teoría del Derecho. Sin pretender analizar las doctrinas que aceptan o niegan al derecho subjetivo, partimos de la definición formulada por el jurista mexicano Eduardo García Máynez: el derecho subjetivo es la posibilidad de hacer (o de omitir) lícitamente algo.<sup>15</sup> Los derechos subjetivos pueden ser *privados* o *públicos*. Estos últimos se subclasifican en a) *derechos individuales*, cuya titularidad está dedicada a todos los habitantes de un Estado sin interesar su nacionalidad o si tienen el status de ciudadanos, frente al poder del Estado sea para exigirle una acción o una omisión; b) *derechos políticos*, de ejercicio exclusivo de los ciudadanos para participar en la vida política, para integrar o formar parte de los órganos del Estado, y c) *derechos de los nacionales* donde se excluyen a las personas de origen extranjero. Además estos derechos reconocidos por el orden jurídico, están complementados por las llamadas libertades públicas.

Los derechos de los administrados están localizados en la primera categoría enunciada de los derechos subjetivos públicos, los cuales responden al cuadro general de limitación racional del poder político a través de la función administrativa.

---

<sup>14</sup> *Ibíd.*, pp. 32 y 33

<sup>15</sup> GARCÍA MÁYNEZ, Eduardo, *Introducción al estudio del Derecho*, Porrúa, México, 1982, p. 16

Antonio Carrillo Flores consideró que por *derecho subjetivo público* debe entenderse la facultad otorgada por el derecho objetivo para proteger el interés de una persona jurídica particular frente al interés colectivo que el Estado representa, mediante el poder conferido a la voluntad de aquella persona para lograr que el Estado emita un acto de tutela de aquel interesado o para obtener la eliminación del acto estatal ya emitido, incompatible con la situación favorable al particular.<sup>16</sup>

De esta manera el concepto de *derecho subjetivo* viene a ser indispensable para comprender el enfrentamiento de los intereses de los particulares y el interés público que el poder administrativo sostiene. La administración pública, con apoyo en los cometidos que le son asignados formalmente, prepara, decide y ejecuta actos que pueden redundar en lo que se ha concebido como la esfera jurídica de los particulares. Esos actos deben acatar la idea del Estado de Derecho y por lo tanto sujetarse a los requisitos formales mismamente previstos en la norma jurídica, que garantiza tanto a la administración como al administrado la fijación de los alcances de la función administrativa y los valores sociales que se pretenden alcanzar.

### **7. Los derechos de los administrados**

Gabino Fraga formó tres grandes agrupaciones de los derechos subjetivos públicos de los particulares en su calidad de administrados, que pueden exigir a la administración pública:

- a) Derechos de los administrados al funcionamiento de la Administración Pública y a las prestaciones de los servicios administrativos.
- b) Derecho de los administrados a la legalidad de los actos de la Administración.
- c) Derechos de los administrados a la reparación de los daños causados por el funcionamiento de la Administración.<sup>17</sup>

Por su parte, Eduardo García de Enterría y Tomas Ramón Fernández consideran que existen tres tipos de derechos subjetivos a favor del administrado:

- a) Derechos de naturaleza patrimonial, “tanto los de naturaleza obligacional, en sus tres clases de contractual, extracontractual por daños y legal (...) como de naturaleza real en sus varias formas y contenidos”.

<sup>16</sup> CARRILLO FLORES, Antonio, op. cit *supra* nota 1, pp. 59 a 60

<sup>17</sup> FRAGA, Gabino, *Derecho Administrativo*, Porrúa, México, 1984, p. 417

b) Derechos creados, declarados o reconocidos por actos administrativos singulares, en favor de una persona determinada (concesionarios, titulares de licencias o autorizaciones, otorgamiento de beneficios tributarios, en general reconocimiento de situaciones jurídicas favorables).

c) Situaciones de libertad individual articuladas técnicamente como derechos subjetivos.<sup>18</sup>

Dichos autores consideran que:

*"(...) en estos supuestos es clara la aplicación del mecanismo técnico del derecho subjetivo en su sentido más tradicional e indiscutible: se trata de situaciones de intereses evidentemente privados, en servicio de los cuales el ordenamiento confiere un poder en favor de su titular, con el cual puede imponer a la Administración una conducta (una prestación o una abstención)."*<sup>19</sup>

En el derecho positivo mexicano, encontramos que el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal recuperó la propuesta de Fraga, al prever en su artículo 17 lo siguiente:

*"Los habitantes del Distrito Federal, en los términos y condiciones que las leyes establezcan, tienen derecho a:*

*"I. La protección de las leyes, reglamentos y demás normas jurídicas que rijan en el mismo;*

*"II. La prestación de los servicios públicos;*

*"III. Utilizar los bienes de uso común conforme a su naturaleza y destino;*

*"IV. Ser indemnizados por los daños y perjuicios causados por los servidores públicos de la entidad, de conformidad con lo establecido en la legislación civil y en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, y*

*"V. Ser informados sobre las leyes y decretos que emitan la Asamblea Legislativa y el Congreso de la Unión, respecto de las materias relativas al Distrito Federal; reglamentos que expidan el Presidente de la República y el Jefe del Distrito Federal así como sobre la realización de obras y prestación de servicios públicos e instancias para presentar quejas y denuncias relacionadas con los mismos y con los servidores públicos responsables."*<sup>20</sup>

Se aprecia un conjunto de derechos eminentemente de prestaciones, donde destaca el derecho para exigir la reparación patrimonial por la actividad estatal, que incorpora otras figuras de derechos subjetivos públicos a favor de los gobernados.

<sup>18</sup> GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo y FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón, op. cit. supra nota 9, tomo II, p. 37

<sup>19</sup> *Ibid.*, p. 38

<sup>20</sup> *Diario Oficial* de la Federación de 26 de julio de 1994 (precepto reformado por el decreto publicado en el *Diario Oficial* de 4 de diciembre de 1997).

De las clasificaciones expuestas se aprecian espacios que dan pie a la instauración de la justicia administrativa, en tanto medio de control jurídico de la administración pública, cuyo objetivo principal es la restauración de la legalidad trastocada por los actos administrativos y que significa un demérito en el derecho de los administrados a la legalidad.

La reparación de los daños ocasionados por el actuar administrativo, que da lugar a la responsabilidad patrimonial del Estado, también está incorporada en el bagaje de la justicia administrativa y resulta imprescindible tomarla en cuenta a efecto de hacer efectivo el Estado de Derecho.<sup>21</sup>

### **III. El Derecho de los administrados a la legalidad y la protección de los intereses jurídicos y legítimos de los particulares frente a la Administración Pública**

#### **1. En busca del interés legítimo**

Como ya quedó expresado, los administrados tienen frente a la administración pública un derecho de características formales, consistente en que los actos emitidos por la autoridad administrativa, deben provenir de autoridad competente para emitirlo conforme lo disponga la ley, y que el acto esté circunscrito a un ritual que proporcione seguridad al particular (constancia escrita, firma del servidor público, identificación del mismo, notificación formal, por lo menos), señalamiento de las causas de hecho que han provocado la actuación de la autoridad, invocación de los preceptos de derecho aplicables al caso concreto, vinculación estricta de la motivación y fundamentación señaladas en el cuerpo del acto administrativo, y respeto a las formalidades secuenciales y concatenadas del procedimiento que sirve como cauce por el cual fluye tanto el actuar del gobernante, sino también la intervención del administrado.

En el sistema jurídico mexicano, este derecho subjetivo público a la legalidad lo desprendemos del primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que viene a ser la piedra angular del Estado de Derecho al que aspiramos.

Antonio Carrillo Flores llegó a proponer que, además de los derechos de legalidad y de audiencia, se proveyera a la Ley fundamental de un capítulo de garantías sustanciales y

<sup>21</sup> Sobre la responsabilidad patrimonial del Estado, cf. Castro Estrada, Álvaro, "La responsabilidad patrimonial del Estado en México. Fundamento constitucional y legislativo", en Damsky (h), Isaac Augusto, López Olvera, Miguel Ángel y Rodríguez Rodríguez, Libardo (coords.), *Estudios sobre la responsabilidad del Estado en Argentina, Colombia y México*, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, 2007, pp. 533-556; Marín González, Juan Carlos (coord.), *Responsabilidad Patrimonial del Estado*, Editorial Porrúa, UNAM, ITAM, , México, 2004; Pérez López, Miguel, "La Responsabilidad Patrimonial del Estado bajo la lupa del Poder Judicial de la Federación", en *Revista del Instituto de la Judicatura Federal*, número 28, enero-junio de 2009, pp. 75-76; *id.*, "La Responsabilidad Patrimonial del Estado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos", en *Praxis de la Justicia Fiscal y Administrativa*, número 2, 2010, ([http://www.tfjfa.gob.mx/ieja/Sitio%20Praxis/praxis\\_articulos.html](http://www.tfjfa.gob.mx/ieja/Sitio%20Praxis/praxis_articulos.html)); e *id.*, "La rectificación adjetiva en materia de Responsabilidad Patrimonial del Estado. Notas sobre la reforma a las Leyes Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado y Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo (junio de 2009)", en *Boletín Mexicano de Derecho Comparado*, nueva serie, año XLII, número 126, septiembre-diciembre de 2009, pp. 1551-1565.

procesales para el particular tipificado como administrado, a efecto de proporcionarle los medios para, si fuera el caso, hacer frente a la autoridad administrativa.<sup>22</sup>

Los derechos de audiencia y a la legalidad de los actos administrativos que poseen los gobernados se han abocado a la protección de sus intereses jurídicos, principalmente, aunque ha sido creciente la extensión de esa protección a los intereses legítimos de los particulares, como son los casos de la Ley de Procedimiento Administrativo y de la Ley Orgánica del Tribunal Contencioso Administrativo, ambas del Distrito Federal, y del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México.

En la fracción XIII del artículo 3 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal se define de la siguiente manera el interés legítimo:

“Derecho de los particulares vinculado con el interés público y protegido por el orden jurídico, que les confiere la facultad para activar la actuación pública administrativa, respecto de alguna pretensión en particular”

Por otro lado, el artículo 231 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México distingue y define los intereses jurídicos y legítimos de la siguiente manera:

“Sólo podrán intervenir en juicio los particulares que tengan un interés jurídico o legítimo que funde su pretensión. Tienen interés jurídico los titulares de un derecho subjetivo público e interés legítimo quienes invoquen situaciones de hecho protegidas por el orden jurídico, tanto de un sujeto determinado como de los integrantes de un grupo de individuos, diferenciados del conjunto general de la sociedad.”

Estas definiciones legales abren amplias posibilidades de debate para penetrar en la problemática de los intereses legítimos, que, a su vez permitirán el análisis de la factibilidad de despejar el camino para establecer mecanismos de protección y restitución de los llamados intereses difusos y colectivos.<sup>23</sup>

El Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, bajo la vigencia de su primera Ley de 1971, elaboró la siguiente tesis de jurisprudencia:

**INTERÉS LEGÍTIMO. PARA EJERCITAR LA ACCIÓN EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SÓLO SE REQUIERE EL.-** El artículo 32 de la Ley del Tribunal no exige la existencia de un interés jurídico para demandar en el juicio contencioso administrativo, *sino de un interés legítimo, para cuya existencia*

<sup>22</sup> CARRILLO FLORES, Antonio, op. cit. supra nota 2, p. 20. *Sobre el derecho constitucional a la legalidad* cf. OVALLE FAVELA, José, *Garantías Constitucionales del Proceso*, Mc Graw Hill, México, 1996, pp. 180-203

<sup>23</sup> Cf. HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, María del Pilar, *Mecanismos de tutela de los intereses difusos y colectivos*, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1997.

*no es necesaria la afectación de un derecho subjetivo, ya que basta la lesión objetiva al particular derivada de la aplicación de la Ley.*

Resoluciones dictadas con fechas 30 de agosto de 1973, 31 de enero de 1974, 29 de octubre de 1974, 11 de mayo de 1976 y 20 de julio de 1976, en los Recursos de Revisión números 14/73 (juicio N° 625/73), 19/73 (juicio N° 818/73), 48/74 (juicio No. 577/74), 4/76 (juicio N° 1305/ 75) y 7/76 (juicio N° 1201/75), respectivamente.<sup>24</sup>

El citado precepto de la Ley de 1971<sup>25</sup> fue objeto de constantes reformas, que validaban el interés jurídico y reivindicaban el interés legítimo.<sup>26</sup> Mismos avatares padeció la Ley del Tribunal de 1995,<sup>27</sup> los que afortunadamente se han detenido en la vigente de 2009.<sup>28</sup>

En la doctrina mexicana encontramos una constante preocupación por definir a los intereses simples, jurídicos y legítimos.<sup>29</sup> Así tenemos el intento de sistematización formulado por Jean Claude Tron Petit y Cristina Fuentes Macías:<sup>30</sup>

a) El *interés simple* es la pretensión, motivo o estímulo que puede tener cualquier sujeto respecto de una cosa o conducta, actualizado cuando en la regulación jurídica general no se establece ningún tipo de facultades en los supuestos normativos para exigir la satisfacción de una pretensión, sino que solo algún o algunos individuos tienen la facultad de incoar un procedimiento de investigación a través de una denuncia.

b) El *interés jurídico* existe cuando una norma jurídica específica (constitucional, legal o contractual) otorga un derecho específico a un individuo, quien a partir de dicha norma gozará de la protección frente a cualquier persona o autoridad, en relación con dicho derecho, siempre y cuando se satisfagan estas condiciones: 1) la existencia de un derecho subjetivo, público o privado, exclusivo, actual y directo; 2) que dicho derecho tenga un reconocimiento por la ley, misma que lo protegerá;

<sup>24</sup> *Gaceta Oficial del Departamento del Distrito Federal*, noviembre 1° de 1976 (Primera época, Instancia: Pleno, TCADF).

<sup>25</sup> *Diario Oficial* de la Federación de 17 de marzo de 1971.

<sup>26</sup> Cf. GÓNGORA PIMENTEL, Genaro, *Introducción al estudio del juicio de amparo*, cuarta edición, Porrúa, México, 1992, pp. 68-73

<sup>27</sup> *Diario Oficial* de la Federación de 19 de diciembre de 1995.

<sup>28</sup> *Gaceta Oficial del Distrito Federal* de 10 de septiembre de 2009. Cf. PÉREZ LÓPEZ, Miguel, "Un nuevo capítulo de la jurisdicción administrativa de la Ciudad de México. Apuntamientos sobre la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal" en *Boletín Mexicano de Derecho Comparado*, número 128, mayo-agosto de 2010, pp. 925-942 (vid. <http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/boletin/cont/128/el/el11.pdf>).

<sup>29</sup> LUCERO ESPINOSA, Manuel, *Teoría y práctica del contencioso administrativo federal*, décima segunda edición, Porrúa, 2013, México, pp. 1-13.

<sup>30</sup> TRON PETIT, Jean Claude y FUENTES MACÍAS, Cristina, "El interés en el derecho mexicano" en *Revista Mexicana de Procuración de Justicia*, volumen I, número 5, junio de 1997, pp. 95-107. También cf. TRON PETIT, Jean Claude, "Prólogo," en REVUELTA VAQUERO, Benjamín y LÓPEZ RAMOS, Neófito (coordinadores), *Acciones colectivas. Un paso hacia la justicia ambiental*, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Porrúa-Asociación de Jueces y Magistrados de Distrito del Poder Judicial de la Federación, AC, 2012, pp. IX-LI; *id.*, "¿Qué hay del interés legítimo? (primera parte)"; *Revista del Instituto de la Judicatura Federal*, número 33, 2012, pp. 247-267, e *id.*, "¿Qué hay del interés legítimo? (segunda parte)"; *Revista del Instituto de la Judicatura Federal*, número 34, 2012, pp. 259-282.

3) sea posible la violación del derecho (supuesto legal de incumplimiento), y 4) la previsión de una protección legal “*que se resuelva en la aptitud de su titular para exigir del obligado su satisfacción mediante la prestación debida*”.

c) El *interés legítimo* está concebido para las personas integrantes de un grupo definido y calificado legalmente, lo que permite su diferenciación objetiva, “*por la que se vean indirectamente beneficiadas o perjudicadas con el incumplimiento de ciertas reglas de derecho objetivo, bien sea porque vean obstaculizada la posibilidad de alcanzar o consumir ciertas posiciones, estatutos o prerrogativas; o bien, porque sean privados de las ventajas ya logradas o que pudieran haber obtenido si la conducta de una autoridad se hubiera realizado dentro del orden jurídico correspondiente, y a pesar de que no sean titulares de derechos subjetivos perfectos*”.

Tron Petit y Fuentes Macías concluyen en considerar que el interés legítimo busca tutelar la legalidad del actuar de la administración a través de sancionar con la nulidad todos los actos que violenten esa legalidad, en términos de mayor generalidad que el interés jurídico.

## **2. El interés legítimo en la jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación**

Desde la década de los noventa del siglo XX se ha conformado un importante cuerpo de jurisprudencia de los tribunales colegiados en materia administrativa que han ido definiendo los perfiles del interés legítimo protegido por los tribunales de jurisdicción administrativa,<sup>31</sup> hasta llegar a la definición de parte de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 69/2002-SS, entre las sustentadas por los Tribunales

---

<sup>31</sup> Cf. las tesis I.4o.A.357 A con rubro “INTERÉS LEGÍTIMO. CONCEPTO”; visible en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, novena época, tomo XVIII, XVI, Agosto de 2002, Tribunales Colegiados de Circuito, p. 1309 (Amparo directo 47/2002. Víctor García León. 8 de mayo de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Alma Margarita Flores Rodríguez); I.4o.A.392 A de rubro “INTERÉS LEGÍTIMO. LO TIENE EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO QUIEN IMPUGNA, POR ESTIMAR ILÍCITAS LA APROBACIÓN E INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL DISTRITO FEDERAL, DIVERSOS DATOS RELATIVOS A PREDIOS COLINDANTES CON SU PROPIEDAD” en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, novena época, tomo XVIII, agosto de 2003, Tribunales Colegiados de Circuito, p. 1768 (Amparo directo 63/2003. 8 de mayo de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Alma Margarita Flores Rodríguez); I.13o.A.74 A con rubro “INTERÉS JURÍDICO EN MATERIA ADMINISTRATIVA. CONSTITUYE UN GÉNERO QUE COMPRENDE TANTO AL DERECHO SUBJETIVO COMO AL INTERÉS LEGÍTIMO, EN TANTO QUE AMBOS ESTÁN TUTELADOS POR NORMAS DE DERECHO”; visible en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, novena época, tomo XVII, Enero de 2003, p. 1802 (Amparo en revisión 186/2002. Hotel Flamingos Plaza, S.A. de C.V. 15 de julio de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Rosalba Becerril Velázquez. Secretaria: Fabiana Estrada Tena); I.4o.A.356 A de rubro “INTERÉS LEGÍTIMO. SU CONEXIÓN CON LAS NORMAS DE ACCIÓN.” visible en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, novena época, tomo XVI, Agosto de 2002, Tribunales Colegiados de Circuito, p. 1310 (Amparo directo 47/2002. Víctor García León. 8 de mayo de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Alma Margarita Flores Rodríguez); I.13o.A.43 A de rubro “INTERÉS LEGÍTIMO, CONCEPTO DE, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 34 DE LA LEY DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL” visible en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, novena época, tomo XV, Marzo de 2002, Tribunales Colegiados de Circuito, p. 1367 (Amparo directo 7413/2001. Roberto Díaz Sesma. 30 de agosto de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Rosalba Becerril Velázquez. Secretario: Everardo Maya Arias).

Colegiados Segundo, Cuarto y Décimo Tercero, todos en Materia Administrativa del Primer Circuito, resuelta el 15 de noviembre de 2002.<sup>32</sup>

En vía de resumen se han llegado a los siguientes planteamientos:

a) El interés jurídico tiene una connotación diversa a la del legítimo, pues mientras el primero requiere que se acredite la afectación a un derecho subjetivo, el segundo supone únicamente la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de los actos impugnados, interés que proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico.

b) No obstante la carencia de la titularidad del derecho subjetivo respectivo (interés jurídico), el reconocimiento de los intereses legítimos para ser objeto de protección jurisdiccional genera estas secuelas: permitir el acceso a la justicia administrativa a aquellos particulares afectados en su esfera jurídica por actos administrativos (interés legítimo), y así ampliar el número de particulares potenciales que pudieran incoar los procedimientos en defensa de sus intereses.

La jurisprudencia del Alto Tribunal de la República consolidó la ruta para validar al interés legítimo en el juicio promovido ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, al modificarse los artículos 180 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) y 8o., fracción I, de la LFPCA,<sup>33</sup> y después pasar a la trascendente reforma constitucional en materia de amparo de junio de 2011, donde también fue incluido el interés legítimo como presupuesto procesal en el momento de incoar la acción constitucional por violación a los derechos humanos, misma que resulta finalmente reglamentada en la nueva Ley de Amparo.<sup>34</sup>

#### **IV. La Incorporación del Interés Legítimo en el Juicio Contencioso Administrativo Federal**

A continuación se realizará un somero análisis del procedimiento legislativo que desembocó en la reforma de la LGEEPA y de la LFPCA de enero de 2012, a efecto de tratar de formular una modesta opinión sobre los alcances de dicha modificación legal.

---

<sup>32</sup> Esta contradicción de tesis dio origen a dos jurisprudencias: a) la Tesis 2a./J. 141/2002 de rubro "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. AMBOS TÉRMINOS TIENEN DIFERENTE CONNOTACIÓN EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO" y b) la Tesis 2a./J. 142/2002, de rubro "INTERÉS LEGÍTIMO, NOCIÓN DE, PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO ANTE EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL," publicadas en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, novena época, tomo XVI, Diciembre de 2002, Segunda Sala, páginas 241 y 242, respectivamente, siendo ponente el ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano, y en su ausencia hizo suyo el asunto el ministro Juan Díaz Romero, y Secretario el Dr. Eduardo Ferrer Mac Gregor Poisot.

<sup>33</sup> *Diario Oficial* de la Federación de 28 de enero de 2011.

<sup>34</sup> *Diario Oficial* de la Federación de 2 de abril de 2013.

## 1. El procedimiento legislativo de la reforma legal

### A. La iniciativa

El senador Manuel Velasco Coello, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), en la sesión celebrada por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión el 26 de abril de 2007, presentó, en nombre de los integrantes de dicho grupo, una iniciativa de reforma a disposiciones de la LGEEPA y de la LFPCA, a fin de legitimar a las personas físicas o morales afectadas por deterioro ambiental (“organizaciones de la sociedad civil y los miembros de las comunidades”), a quienes se les visualiza como “agentes fundamentales para la tutela ambiental”.

En tal sentido y de forma simple, los autores de la iniciativa exponen que el interés en la materia ambiental:

“(…) no es exclusivo, ni tampoco deriva de la observancia de normas legales para satisfacer intereses de particulares; se trata de un interés, generalmente grupal, nacido de la infracción de normas legales ideadas para salvaguardar el interés general, pero cuya eficacia trasciende en ciertos sujetos *en atención a su situación de proximidad al acto*. De igual manera legitima a las organizaciones de la sociedad civil cuyo objeto es la protección y conservación del ambiente. En concreto se propone que se reconozca el interés legítimo a las personas físicas y morales de las comunidades posiblemente afectadas, para demandar la nulidad de los actos citados de conformidad a lo previsto por la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo.”<sup>35</sup>

De esta manera, en consideración de los legisladores signantes de la propuesta resultaba indispensable establecer “un sistema objetivo y amplio que garantice el respeto a la ley en beneficio no solo de los titulares de derechos subjetivos, si no de los que se vean indirectamente perjudicados con la infracción de normas de derecho ambiental.”

En consecuencia, se proponía la reforma de la fracción I del artículo 8o. de la LFPCA y del artículo 180 de la LGEEPA, con un transitorio que establecía que el decreto de reformas entraría en vigor al día siguiente de su publicación en el “*Diario Oficial*” de la Federación.

---

<sup>35</sup> *Gaceta del Senado* de 26 de abril de 2007.

A continuación, me permito exponer el contenido de los preceptos vigentes en el momento de presentar la iniciativa y de los propuestos en la iniciativa del PVEM: (cuadro 1)<sup>36</sup>

## CUADRO 1

PRECEPTOS VIGENTES	INICIATIVA DEL PVEM
<p><b>LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE</b></p> <p><b>ARTÍCULO 180.</b> Tratándose de obras o actividades que contravengan las disposiciones de esta Ley, los programas de ordenamiento ecológico, las declaratorias de áreas naturales protegidas o los reglamentos y normas oficiales mexicanas derivadas de la misma, las personas físicas y morales de las comunidades afectadas tendrán derecho a impugnar los actos administrativos correspondientes, así como a exigir que se lleven a cabo las acciones necesarias para que sean observadas las disposiciones jurídicas aplicables, siempre que demuestren en el procedimiento que dichas obras o actividades originan o pueden originar un daño a los recursos naturales, la flora o la fauna silvestre, la salud pública o la calidad de vida. Para tal efecto, deberán interponer el recurso administrativo de revisión a que se refiere este capítulo.</p>	<p><b>LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE</b></p> <p><b>ARTÍCULO 180.</b> Tratándose de obras o actividades que contravengan las disposiciones de esta Ley, los programas de ordenamiento ecológico, las declaratorias de áreas naturales protegidas o los reglamentos y normas oficiales mexicanas derivadas de la misma, las personas físicas y morales de las comunidades <b><i>posiblemente</i></b> afectadas tendrán derecho a impugnar los actos administrativos correspondientes, así como a exigir que se lleven a cabo las acciones necesarias para que sean observadas las disposiciones jurídicas aplicables, siempre que demuestren en el procedimiento que dichas obras o actividades originan o pueden originar un daño a los recursos naturales, la flora o la fauna silvestre, la salud pública o la calidad de vida. Para tal efecto, deberán interponer el recurso administrativo de revisión a que se refiere este capítulo.</p> <p><b><i>Se reconoce interés legítimo a las personas referidas en el párrafo anterior, para demandar la nulidad de los actos citados de conformidad a lo previsto por la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo.</i></b></p>
<p><b>LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO</b></p> <p><b>ARTÍCULO 8o.</b> Es improcedente el juicio ante el Tribunal en los casos, por las causales y contra los actos siguientes:</p> <p>I. Que no afecten los intereses jurídicos del demandante.</p>	<p><b>LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO</b></p> <p><b>ARTÍCULO 8º.</b> Es improcedente el juicio ante el Tribunal en los casos, por las causales y contra los actos siguientes:</p> <p>I. Que no afecten los intereses jurídicos del demandante <b><i>o aquellos intereses legítimamente reconocidos por las leyes que rigen al acto impugnado.</i></b></p>

<sup>36</sup> En el cuadro 1, los cambios propuestos en la iniciativa aparecen con cursivas.

La iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca; y de Estudios Legislativos, Primera, para continuar con el trámite legislativo correspondiente.

## **B. El dictamen en el Senado y su discusión**

El dictamen de las Comisiones Unidas parte del reconocimiento del derecho social a un medio ambiente adecuado para el desarrollo y bienestar de las personas, previsto en el cuarto párrafo del artículo 4 de la Constitución Federal, calificando al ambiente en un bien jurídicamente protegido y de alcance colectivo.<sup>37</sup> El derecho a un medio ambiente adecuado es reconocido como un derecho subjetivo, lo que llevó a las dictaminadoras a considerar que resultan imprescindibles los mecanismos procesales que permitan su tutela, o sea debe reconocerse la necesidad de establecer “instrumentos jurídicos que permitan el acceso a la justicia ambiental”; entre los que se ubican el recurso de revisión señalado en el artículo 180 de la LGEEPA y la denuncia popular reconocida en el numeral 189 del mismo ordenamiento legal.<sup>38</sup>

Las Comisiones Unidas concluyeron que en la materia ambiental se presentaba un problema de legitimación para la promoción de los medios de defensa, pues debe atenderse a la naturaleza del bien jurídicamente tutelado, el medio ambiente es un “bien de titularidad colectiva”. Esa amplitud respecto de los titulares de dicho bien avala la ampliación de la esfera de legitimación procesal, a fin de lograr una tutela efectiva para toda persona en la materia ambiental y, en consecuencia, estimaron atendible el reconocimiento del interés legítimo de quienes intenten promover el recurso de revisión del artículo 180 de la LGEEPA, aun sin ser afectados directamente en sus derechos subjetivos particulares.

Las Comisiones ubican al interés legítimo en una situación intermedia entre el interés jurídico y el interés simple, y consideraron que era imperativo que el legislador fijase de forma precisa los alcances subjetivos del interés legítimo, o sea “que defina las personas que contarán con legitimación para ejercitar (sic) los instrumentos contencioso-administrativos contenidos en el presente artículo.”

Por ello, el dictamen propuso un tercer párrafo al artículo 180 de la LGEEPA, a efecto de precisar a los sujetos con interés legítimo en materia ambiental: “*tendrán interés legítimo las personas físicas o morales de las comunidades posiblemente afectadas por dichas obras o actividades.*”

Correlacionado con estas puntualizaciones en el tema del interés legítimo como presupuesto procesal del juicio contencioso administrativo federal, las Comisiones senatoriales estimaron pertinente modificar la propuesta de reforma de la fracción I del artículo 8 de la LFPCA, a efecto de aclarar, *contrario sensu*, que dicha vía jurisdiccional sería procedente en “los casos de legitimación expresamente reconocida por las leyes que rigen al acto impugnado”, sin circunscribirlo necesariamente a la materia ambiental.

---

<sup>37</sup> *Gaceta del Senado* de 11 de diciembre de 2007.

<sup>38</sup> *Loc. cit.*

Las Comisiones reconocieron que el citado recurso de revisión resultaba de interposición obligatoria previa a continuar la impugnación en la vía jurisdiccional de los actos de la autoridad ambiental ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA), por lo que, con el mismo propósito de fortalecer los medios integrantes de la justicia administrativa en materia ambiental, se propuso hacer optativa la interposición del recurso de revisión o intentar el juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Además, las Comisiones plantearon la procedencia extensiva del recurso de revisión en los casos de impugnación de las resoluciones administrativas que violenten leyes de las cuales la LGEEPA sea supletoria, además de las disposiciones administrativas derivadas de ellas.

De igual manera, en nombre de la claridad y precisión, el dictamen contiene propuestas de sustitución de la terminología del primer párrafo del artículo 180 de la LGEEPA: a) “medio ambiente” en lugar de “recursos naturales”; b) “la vida silvestre” sustituye “la flora o la fauna silvestre”; y c) se elimina el concepto “calidad de vida”, manteniendo el de “salud pública”.

El transitorio único se mantuvo en los términos de la iniciativa.

El contenido de los preceptos de la LGEEPA y de la LFPCA objeto del dictamen quedaron de la siguiente manera, en comparación con la iniciativa que le dio origen:

**CUADRO 2**<sup>39</sup>

INICIATIVA DEL PVEM	DICTAMEN DEL SENADO
<p><b>LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE</b></p> <p><b>ARTÍCULO 180.</b> Tratándose de obras o actividades que contravengan las disposiciones de esta Ley, los programas de ordenamiento ecológico, las declaratorias de áreas naturales protegidas o los reglamentos y normas oficiales mexicanas derivadas de la misma, las personas físicas y morales de las comunidades posiblemente afectadas tendrán derecho a impugnar los actos administrativos correspondientes, así como a exigir que se lleven a cabo las acciones necesarias para que sean observadas las disposiciones jurídicas aplicables, siempre que demuestren en el procedimiento que dichas obras o actividades originan o pueden originar un daño a los</p>	<p><b>LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE</b></p> <p><b>ARTÍCULO 180.</b> Tratándose de obras o actividades que contravengan las disposiciones de esta Ley <i>y de aquellas a las cuales se aplica de manera supletoria, así como de los reglamentos y normas oficiales mexicanas derivadas de las mismas</i>, los programas de ordenamiento ecológico, las declaratorias de áreas naturales protegidas o los reglamentos y normas oficiales mexicanas derivadas de la misma, las personas físicas y morales <i>que tengan interés legítimo</i> tendrán derecho a impugnar los actos administrativos correspondientes, así como a exigir que se lleven a cabo las acciones necesarias para que</p>

<sup>39</sup> En el cuadro 2, los cambios propuestos en el dictamen aparecen con cursivas.

<p>recursos naturales, la flora o la fauna silvestre, la salud pública o la calidad de vida. Para tal efecto, deberán interponer el recurso administrativo de revisión a que se refiere este capítulo.</p> <p>Se reconoce interés legítimo a las personas referidas en el párrafo anterior, para demandar la nulidad de los actos citados de conformidad a lo previsto por la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo.</p>	<p>sean observadas las disposiciones jurídicas aplicables, siempre que demuestren en el procedimiento que dichas obras o actividades originan o pueden originar un daño <b>al medio ambiente, los recursos naturales, la vida silvestre o la salud pública.</b></p> <p>Se reconoce interés legítimo a las personas referidas en el párrafo anterior, para demandar la nulidad de los actos citados de conformidad a lo previsto por la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo.</p> <p><b>Para tal efecto, de manera optativa podrán interponer el recurso administrativo de revisión a que se refiere este capítulo, o acudir al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.</b></p> <p><b>Para los efectos del presente artículo, tendrán interés legítimo las personas físicas o morales de las comunidades posiblemente afectadas por dichas obras o actividades.</b></p>
<p><b>LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO</b></p> <p><b>ARTÍCULO 8o.</b> Es improcedente el juicio ante el Tribunal en los casos, por las causales y contra los actos siguientes:</p> <p>I. Que no afecten los intereses jurídicos del demandante o aquellos intereses legítimamente reconocidos por las leyes que rigen al acto impugnado.</p>	<p><b>LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO</b></p> <p><b>ARTÍCULO 8º.</b> Es improcedente el juicio ante el Tribunal en los casos, por las causales y contra los actos siguientes:</p> <p>I. Que no afecten los intereses jurídicos del demandante, <b>salvo en los casos de legitimación expresamente reconocida por las leyes que rigen al acto impugnado.</b></p>

En la sesión del 11 de diciembre de 2007, el dictamen fue sometido ante el pleno de la Cámara de Senadores, discutido y aprobado por 86 votos; dos en contra y ocho abstenciones, turnándose a la Cámara de Diputados.

**C. El dictamen en la Cámara de Diputados y su discusión**

El 12 de diciembre, la mesa directiva de la Cámara de Diputados remitió la correspondiente minuta a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Justicia, la cual formuló dictamen en diciembre de 2010.<sup>40</sup>

<sup>40</sup> Cf. *Gaceta Parlamentaria* de la Cámara de Diputados de 14 de diciembre de 2010.

El dictamen reitera las aportaciones de la minuta senatorial: a) el reconocimiento del interés legítimo de las personas físicas y morales de comunidades afectadas para impugnar los actos administrativos irregulares y contrarios a la normatividad ambiental, y b) la opción de agotar el recurso de revisión de la LGEEPA o acudir al juicio contencioso administrativo ante el TFJFA.

Lo destacable del dictamen es el papel que las Comisiones Unidas ponen respecto de la protección del ambiente, al calificarlo como un bien jurídicamente protegido por la Constitución General de la República. Sobre este tema, el dictamen dispone lo siguiente:

“El Estado debe proporcionar instrumentos legales para su protección, ya que dicha garantía de igualdad se vincula a la calidad de vida de los individuos. Por ello, en la medida en que el ambiente afecta a la colectividad, éste se convierte en un valor social. Por ello se considera bien jurídico protegido.”

Las Comisiones vinculan las reformas sometidas a su consideración con la enmienda al artículo 17 constitucional, por la cual fueron incluidas las acciones colectivas en la Ley Suprema, pues de esta manera se facilita el acceso a la justicia de los grupos afectados y permitirá mejorar “la percepción generalizada de desconfianza hacia el propio Estado respecto a su capacidad de resolver en forma pacífica y dentro del marco de la ley los conflictos sociales”.<sup>41</sup>

Las acciones colectivas son calificadas como las instituciones procesales que permiten la defensa, protección y representación jurídica colectiva de derechos e intereses de los miembros de una colectividad o grupo en una sociedad.

Por ello, el dictamen considera que la reforma a la LGEEPA y a la LFPCA hace efectiva la instauración constitucional de las acciones colectivas, en el nivel legal y en la materia ambiental.

En conclusión, las dictaminadoras expresaron su plena coincidencia con el contenido de la minuta enviada por la colegisladora, sin proponer cambio alguno.

El dictamen fue sometido a la consideración del Pleno de la Cámara, siendo aprobado en la Cámara de Diputados con 376 votos en pro y 14 abstenciones.

El proyecto aprobado fue turnado al Ejecutivo, mismo que promulgó el “Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 180 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y se reforma la fracción I del artículo 8o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo,” publicado en el “*Diario Oficial*” de la Federación de 28 de enero de 2011.

---

<sup>41</sup> Cf. FIX-ZAMUDIO, Héctor y VALENCIA CARMONA, Salvador, *op. cit. supra* nota 7, pp. 56-72; LÓPEZ RAMOS, Neófito, “Breve análisis de la regulación de las acciones colectivas”, en REVUELTA VAQUERO, Benjamín y LÓPEZ RAMOS, Neófito (coordinadores), *op. cit. supra* nota 29, pp. 63-79, y MINUTTI ZANATTA, Rubén, “Algunas reflexiones sobre las acciones colectivas en México”, en REVUELTA VAQUERO, Benjamín y LÓPEZ RAMOS, Neófito (coordinadores), *op. cit. supra* nota 29, pp. 81-99.

## **2. Comentarios a la reforma legal**

### **A. La adición del interés legítimo como presupuesto procesal en la jurisdicción administrativa federal**

El artículo 180 de la LGEEPA reconoce que cuentan con interés legítimo, las personas físicas o morales de las comunidades posiblemente afectadas por obras o actividades que contravengan las disposiciones de esta ley y de aquellas a las cuales se aplica de manera supletoria, así como de los reglamentos y normas oficiales mexicanas derivadas de las mismas, los programas de ordenamiento ecológico, las declaratorias de áreas naturales protegidas o los reglamentos y normas oficiales mexicanas derivadas de la misma, por lo que podrán impugnar los actos administrativos correspondientes, así como a exigir que se lleven a cabo las acciones necesarias para que sean observadas las disposiciones jurídicas aplicables, siempre que demuestren en el procedimiento que dichas obras o actividades originan o pueden originar un daño al medio ambiente, los recursos naturales, la vida silvestre o la salud pública.

Dichas personas tienen la opción de agotar el recurso de revisión previsto en dicha Ley General o interponer el juicio ante el TFJFA.

Asimismo, se extiende la aplicación supletoria del recurso de revisión de la LGEEPA hacia las leyes ambientales, lo que a su vez también abarcaría la opción de agotar dicho medio de defensa en sede administrativa o impetrar la acción ante el TFJFA.

Por lo que toca a la LFPCA, la nueva fracción I del artículo 8o. establece que el juicio ante el TFJFA será improcedente contra los actos que “no afecten los intereses jurídicos del demandante, salvo en los casos de legitimación expresamente reconocida en las leyes que rigen el acto impugnado”, que hasta el momento sería el caso de la LGEEPA, sin perjuicio de que en otras materias del ámbito federal, se extienda la posibilidad de ampliar los supuestos de reconocer el interés legítimo, como podrían ser lo concerniente a la protección de los monumentos y zonas arqueológicas, artísticos e históricos, el desarrollo social o los asentamientos humanos, al menos.

En el procedimiento legislativo que dio origen a la reforma, pesó la concepción de reconocer la posibilidad de que grupos sociales pudiesen formular instancias de impugnación, sin necesidad de acreditar un derecho subjetivo afectado y, en consecuencia, quedar relevados de demostrar el interés jurídico correspondiente.

Se observa una limitación legal para la existencia del interés legítimo en los juicios administrativos federales a diferencia de las leyes de la jurisdicción administrativa del Distrito Federal y del Estado de México: que esté expresamente reconocido en la ley que rija el acto impugnado, por lo que hasta este momento queda circunscrito a la materia ambiental y las materias adyacentes a esta (v. gr. aguas, vida silvestre, desarrollo forestal).

## **B. El fortalecimiento de la justicia administrativa en materia ambiental**

La reforma legal de enero de 2011 mejora la procedibilidad de los medios de defensa de los particulares frente a los actos y resoluciones de la autoridad administrativa ambiental, como ya quedó antes expuesto: a) al señalar la opción de agotar el recurso de revisión de la LGEEPA o de acudir ante el TFJFA (en las vías tradicional, en línea o sumaria, según se actualicen los supuestos legales correspondientes); b) volver supletoria la regulación del recurso administrativo de la LGEEPA respecto del *corpus* legal en materia ambiental, donde la citada Ley General resulte supletoria, con lo que se procura superar un estado de inseguridad jurídica para los particulares; y c) despejar la competencia del TFJFA para conocer de las impugnaciones en materia ambiental, ahora en el nuevo artículo 180 de la LGEEPA, lo que resultaba poco claro en el artículo 176 del mismo ordenamiento legal, el cual quedó intocado en la reforma que nos ocupa. Esta definición indubitable de la competencia del Tribunal era necesaria, pues en los preceptos anteriores de la reforma de enero de 2011 solo se hacía referencia de forma nebulosa a “instancias jurisdiccionales competentes”. Siempre es mejor precisar la competencia, que dejarlo a una interpretación que sin duda la definirá, a riesgo de hacer frustrante la impartición de justicia.

No debe dejarse de ver la reciente reforma al Reglamento Interior del TFJFA, por el que fue modificada la denominación de la Sala Especializada en Resoluciones de Órganos Reguladores de la Actividad del Estado, para ahora ser conocida como la Sala Especializada en Materia Ambiental y de la Regulación,<sup>42</sup> por el que se reconoce la importancia y trascendencia de dicha materia. En abundancia, la Sala Superior del TFJFA reconoce, en el considerando Vigésimo primero de su Acuerdo SS/5/2013, el innegable peso de la materia ambiental en el ordenamiento jurídico mexicano, de la siguiente manera:

“Que ha sido una preocupación del Estado Mexicano, establecer leyes y procedimientos para proteger el medio ambiente, siendo ésta una materia que día a día cobra mayor importancia, derivado de la diversidad de ecosistemas con que cuenta el territorio nacional, estando además una gran parte de la actividad humana, económica, política y social del país relacionada con el medio ambiente, siendo además la materia ambiental una de las más técnicas que existen en el sistema jurídico, por lo que es fundamental que sean entes especializados los que sustancien y resuelvan las controversias que se susciten en este tema, a fin de mejorar la impartición de justicia para la ciudadanía.”

<sup>42</sup> Acuerdo SS/5/2013 por el que se reforman los artículos 22, fracción XIII, 23, fracción III, 23 Bis, fracción I, y se adicionan las fracciones V y VI del citado artículo 23 Bis, del Reglamento Interior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, publicado en el “*Diario Oficial*” de la Federación de 3 de junio de 2013.

## **E. Comentario final**

De la exposición anterior, se puede apreciar que la reforma legal de enero de 2011 agregó la figura del interés legítimo como fórmula de legitimación, que faculte no solo al particular afectado en su interés jurídico, englobado en su derecho subjetivo, a promover instancias impugnativas contra actos de la autoridad administrativa ambiental, sino que personas o grupos sociales que se estimen lesionados materialmente por dichos actos administrativos, tengan la posibilidad de impugnarlos ante el TFJFA.

El Congreso de la Unión definirá en que otras materias puede extenderse la posibilidad de extender el reconocimiento del interés legítimo a particulares o grupos sociales para promover el juicio contencioso administrativo federal, a fin de cumplir el mandato constitucional de que el Estado mexicano, a través de sus tribunales, imparta justicia de forma pronta, imparcial y completa.

La reforma legal de enero de 2011 también procuró una importante mejora del sistema de la justicia administrativa federal, al armonizar el recurso de revisión de la LGEEPA con la opción de acudir al TFJFA y señalarlo como regulación supletoria del resto de la legislación ambiental.

## **V. Conclusiones**

De la anterior exposición desprendo las siguientes conclusiones:

**Primera.** En el Estado social de Derecho y en sus posteriores modalidades político-económicas, el papel de la administración pública mantiene una especial relevancia para resolver los problemas de una sociedad demandante en demasía, atender los retos que los cambios científicos y tecnológicos imponen, y considerar las diferencias que la economía del mercado impone y profundiza entre los grupos sociales, para solucionarlas conforme a las disposiciones del ordenamiento jurídico. La actuación administrativa dirigida a los particulares, a fin de cumplir estos nuevos cometidos –agregados a los clásicos del Estado constitucional liberal–, sigue aherrojada por el clásico principio de legalidad y, consecuentemente, sometida a los mecanismos de control jurídico, especialmente encomendados a los tribunales, sea aquellos integrados al poder judicial o creados bajo los lineamientos de la jurisdicción administrativa delineada por el Consejo de Estado francés.

**Segunda.** La actuación de la administración pública puede generar fricciones entre los intereses que representa (el interés público) y los individuales. Durante largo tiempo, los intereses de los particulares fueron calificados como *jurídicos* (asimilados al concepto jurídico fundamental del “derecho subjetivo”) y *simples*. Los primeros gozaban de una protección expresa del ordenamiento jurídico, mientras los intereses simples resultaban aquellos que satisfacían materialmente a los particulares, sin posibilidad de exigir jurídicamente su cumplimiento. En la segunda mitad del siglo XX, fueron reconocidos los intereses *legítimos* como aquellas cuestiones que satisfacen necesidades particulares o colectivas que, sin encontrarse

expresamente señaladas en el ordenamiento jurídico, es posible que sean susceptibles de protección jurídica, sea por el juzgador o por la autoridad administrativa, requiriéndose una apertura de criterio para su consideración o no.

**Tercera.** En nuestro medio jurídico, el interés legítimo fue considerado a nivel legal en la primera Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal y en otros ordenamientos locales reguladores del procedimiento administrativo y de la jurisdicción administrativa, lo que llevó a su definición y reconocimiento jurisprudencial, de parte de la Segunda Sala del Más Alto Tribunal de la República. La definición del interés jurídico de la Suprema Corte de Justicia, a partir de esos antecedentes legales en materia administrativa, ha resultado un punto de arranque para el debate sobre dicha figura.

**Cuarta.** Como antecedente resulta notable la consideración del interés legítimo como presupuesto procesal para intentar la acción constitucional de amparo en el Anteproyecto de Nueva Ley de Amparo elaborado por la Comisión de alto nivel integrada por los juristas Héctor Fix-Zamudio, José Ramón Cossío Díaz, Javier Quijano Baz, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Humberto Román Palacios, Juan Silva Meza, Manuel Ernesto Saloma Vera y César Esquinca Muñoa.

**Quinta.** Los antecedentes mencionados, sin duda, influyeron en el procedimiento revisor de la Constitución que dieron origen a las reformas y adiciones en materia de amparo de 2011, donde la nueva fracción I del artículo 107 de la Ley Suprema de la Unión establece que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho (el típico interés jurídico) o de un *interés legítimo individual o colectivo*, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución y *con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico*.

**Sexta.** Previa a la promulgación de la trascendente reforma constitucional en materia de amparo, el Poder Legislativo federal expidió un decreto de reformas a la LFPCA y a la LGEEPA que instauro al interés legítimo como un presupuesto procesal de legitimación a fin de promover el juicio contencioso administrativo ante el TFJFA, además de mejorar el encuadramiento jurídico de la justicia administrativa en materia ambiental. Esta reforma robustece el derecho procesal administrativo federal, que en los últimos quince años se ha visto acrecentado con un conjunto de modificaciones legales y reglamentarias como han sido, entre las más relevantes, la expedición de la LFPCA (2006) y de la Ley Orgánica del TFJFA (2007), la creación de los juicios en línea, la instauración de las Salas Especializadas y Auxiliares, mejoras adjetivas (v. gr. en materia de vía sumaria, suspensión, del sistema de notificaciones), ampliación de la competencia material del TFJFA. Sin duda, es una reforma de gran calado, donde especialmente los magistrados de la nueva Sala Especializada en Materia Ambiental y de la Regulación enfrentarán el reto de analizar las argumentaciones de los justiciables que impetren sus acciones por afectación de su interés legítimo, con la seguridad de que lo harán con el profesionalismo que ha caracterizado al TFJFA.

## Fuentes de información

CARRILLO FLORES, Antonio. *La Justicia Federal y la Administración Pública*, segunda edición. Porrúa, México, 1973.

CISNEROS FARÍAS, Germán, FERNÁNDEZ RUIZ, Jorge y LÓPEZ OLVERA, Miguel Alejandro, *Justicia Administrativa. Segundo Congreso Iberoamericano de Derecho Administrativo*, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, México, 2007.

DEL PALACIO DÍAZ, Alejandro. *Del Estado de Derecho al derecho del Estado*, Leega, México, 1988.

FERRER MAC-GREGOR, Eduardo, *Juicio de amparo e interés legítimo*, , Porrúa, México, 2004.

——— y SAIZ ARNAIZ, Alejandro (coordinadores), *Control de convencionalidad, interpretación conforme y dialogo jurisprudencial*, Porrúa -UNAM, México, 2012.

FIX-ZAMUDIO, Héctor, *Introducción a la Justicia Administrativa en el ordenamiento mexicano*, El Colegio Nacional, México, 1983.

———. “La justicia administrativa en México”, en VV. AA. *Conferencias Magistrales*, Consejo de la Judicatura Federal-Instituto Federal de Defensoría Pública, México.

——— y Valencia Carmona, Salvador. *Las reformas en derechos humanos, procesos colectivos y amparo como nuevo paradigma constitucional*. Editorial Porrúa -UNAM, México, 2013.

FRAGA, Gabino, *Derecho Administrativo*, Porrúa, México, 1984.

GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo, *La lucha contra las inmunidades del poder*. Civitas, Madrid, 1987.

———. *Revolución francesa y administración pública*, Alianza Editorial, Madrid.

——— y FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón, *Curso de Derecho Administrativo*, Tomo II, Civitas, 1991.

GARCÍA MÁYNEZ, Eduardo, *Introducción al estudio del Derecho*, Porrúa, México, 1982.

GARCÍA PELAYO, Manuel, *Derecho Constitucional Comparado*, Alianza Editorial, Madrid, 1993.

GARCÍA RAMÍREZ, Sergio y MORALES SÁNCHEZ, Julieta, *La reforma constitucional sobre derechos humanos (2009-2011)*, segunda edición, Porrúa-UNAM, México, 2012.

GÓNGORA PIMENTEL, Genaro, *Introducción al estudio del juicio de amparo*, cuarta edición, México, Porrúa, 1992.

HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, María del Pilar, *Mecanismos de tutela de los intereses difusos y colectivos*, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1997.

LUCERO ESPINOSA, Manuel, *Teoría y práctica del contencioso administrativo federal*, décimo segunda edición, Porrúa, México, 2013.

OVALLE FAVELA, José. *Garantías Constitucionales del Proceso*, Mc Graw Hill, México, 1996.

QUIROZ ACOSTA, Enrique, *Lecciones de Derecho Constitucional*, Tomo I, Porrúa, México, 1999.

REVUELTA VAQUERO, Benjamín y López Ramos, Neófito (coordinadores), *Acciones colectivas. Un paso hacia la justicia ambiental*, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Porrúa-Asociación de Jueces y Magistrados de Distrito del Poder Judicial de la Federación, AC, 2012.

VÁZQUEZ ALFARO, José Luis, *El control de la administración pública en México*, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, México, 1996.

VV. AA. *Los grandes problemas jurídicos. Recomendaciones y propuestas. Estudios jurídicos en memoria de José Francisco Ruiz Massieu*, Porrúa, México, 1995.

### **Hemerográficas**

PÉREZ LÓPEZ, Miguel, "La enseñanza de la Justicia Administrativa en México" en *Alegatos*, número 21, mayo-agosto de 1992, México, Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco, pp. 49-58.

———, "Necesidad de leyes uniformes del procedimiento administrativo" en *Alegatos*, número 28, septiembre-diciembre de 1994, México, Universidad Autónoma Metropolitana, pp. 359-372.

———, “La justicia administrativa en la Constitución federal mexicana” en *Alegatos*, número 41, enero-abril de 1999, México, Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco, pp. 97-108.

———, “El recurso de revisión en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo” en *Revista de Investigaciones Jurídicas*, número 24, 2000, México, Escuela Libre de Derecho, pp. 396-399.

———, “Un nuevo capítulo de la jurisdicción administrativa de la Ciudad de México. Apuntamientos sobre la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal” en *Boletín Mexicano de Derecho Comparado*, número 128, mayo-agosto de 2010, México, UNAM, pp. 925-942 (vid. <http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/boletin/cont/128/el/el11.pdf>).

TRON PETIT, Jean Claude, “¿Qué hay del interés legítimo? (primera parte)” *Revista del Instituto de la Judicatura Federal*, número 33, 2012, México, pp. 247-267.

———, “¿Qué hay del interés legítimo? (segunda parte)” *Revista del Instituto de la Judicatura Federal*, número 34, 2012, México, pp. 259-282.

——— y FUENTES MACÍAS, Cristina, “El interés en el derecho mexicano” en *Revista Mexicana de Procuración de Justicia*, volumen I, número 5, junio de 1997, México, Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, pp. 95-107.

## **Normativas**

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.

Acuerdo SS/5/2013 por el que se reforman los artículos 22, fracción XIII, 23, fracción III, 23 Bis, fracción I, y se adicionan las fracciones V y VI del citado artículo 23 Bis, del Reglamento Interior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, publicado en el “*Diario Oficial*” de la Federación de 3 de junio de 2013.

## **Jurisprudenciales**

*Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época.